

ISSN:

Colombia

Boletín Informativo Trimestral de Peace Brigades International en Colombia

№1 - Octubre 2008

A woman with dark hair, wearing a yellow top, is shown in profile, looking to the right. She is holding a white sign that features a black and white portrait of a man with dark hair. The background is slightly out of focus, showing a blue wall and a window with a metal grille.

**Nuevas amenazas,
nuevas firmas**

**Oacnudh
¿Hacia un nuevo mandato?**

**PBI en la evaluación
de directrices de la U.E.**

**Tercer encuentro de víctimas:
en busca de una Comisión Ética**

SUMARIO

◆ “Temor e intimidación” en Colombia según el último informe de Amnistía Internacional.	3
◆ OACNUDH ¿hacia un mandato ajustado?.	3
◆ Aumenta el acoso contra defensores	4
◆ Tercer encuentro del Movimiento Nacional de Víctimas	5
◆ Kankuamos: recuperación cultural en medio de la violencia	6
◆ Reelección de Uribe entre controversias nacionales	8

PEACE BRIGADES INTERNATIONAL

PBI COLOMBIA

◆ Barrancabermeja: Comisión intersectorial por la vida en el Magdalena Medio ...	9
◆ Bogotá: Arauca, en medio del fuego cruzado	9
◆ Medellín: Resistir en la Esperanza tras una década de impunidad	10
◆ Urabá: Delimitación de fincas en Cacarica	11

INTERNACIONAL

◆ La Oficina Europea de PBI viaja al Congo	12
◆ PBI en la evaluación de las directrices para defensores de la Unión Europea.....	12
◆ Berenice Celeyta lleva la “Operación Dragón” a Washington	13
◆ PBI Guatemala publica el informe “Minería de metales y DDHH”	14

PERSONAL

◆ Nueva Delhi - Nueva York - Bogotá	15
◆ “En Camino”, música de un brigadista de Colombia al mundo	15

FINANCIADORES PBI COLOMBIA

Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD) (a través de PBI Cataluña)	Gobierno de Cantabria (a través de PBI Estado Español)
Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) (a través de PBI Estado Español)	Gobierno de Navarra (a través de Mugarik Gabe)
Appletree Foundation (a través de PBI Reino Unido)	Intermón-Oxfam
Ayuntamiento de Palencia (a través de Sodepaz)	Kerkinactie
Broederlijk Delen	Law Society (a través de PBI Reino Unido)
Cafod	Ministerio de Asuntos Exteriores, Francia (a través de PBI Francia)
Canadian Autoworkers (a través de PBI Canadá)	Ministerio de Asuntos Exteriores, Suiza (a través de PBI Suiza)
Canadian International Development Agency (CIDA) (a través de PBI Canadá)	Misereor
Central Missie Commissariat (CMC)	Project Counselling Service (Heks)
Diakonia	Rausing Trust (a través de PBI Reino Unido)
Diakonisches Werk	Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ)
Fons Mallorquí	(a través de PBI Alemania)
	Trocaire

Colombia: “Temor e intimidación”

El 17 de septiembre Amnistía Internacional (AI) publicaba un informe especial sobre los peligros del trabajo de derechos humanos en Colombia titulado “*Temor e intimidación*” en el que define a los defensores como “esenciales” para la eliminación de violaciones de derechos fundamentales subrayando que los atentados contra ellos persisten para crear un clima de terror que disuada a otros defensores de desarrollar su trabajo. Y es que, a pesar del proceso de desmovilización, -dicen-, continúan las amenazas por parte de grupos paramilitares y las autoridades parecen estar haciendo uso indebido de la ley al abrir investigaciones sobre cargos falsos o infundados contra defensores con el fin de estigmatizarlos e impedirles realizar su labor. “*No solamente están menoscabando su credibilidad, sino también hacen que corran riesgo de sufrir agresiones físicas*”. AI considera que el Programa de Protección de los Defensores puesto en marcha por el Ministerio del Interior “*no está concebido para tener efectos a largo plazo*” y subraya la contradicción entre directivas públicas que, por un lado, instan a los funcionarios a apoyar el trabajo de los defensores mientras que, por otra parte, el propio presidente de la República les acusa reiteradamente de mantener vínculos con la guerrilla.

Las recomendaciones de AI están centradas en buscar un reconocimiento público del trabajo de los defensores, luchando contra la impunidad e impidiendo su judicialización arbitraria.

Peace Brigades International Colombia quiere sumarse a esas recomendaciones al compartir la preocupación de Amnistía Internacional por el clima de intimidación bajo el que viven los defensores de DDHH, que, muchas veces arriesgando su propia vida, trabajan para construir una sociedad colombiana más justa.



Manifestación ciudadana en Bogotá

OACNUDH en Colombia, ¿hacia un mandato ajustado?

El 18 de junio el vicepresidente Francisco Santos, de visita en Ginebra para la primera sesión del recién estrenado Consejo de Derechos Humanos, declaraba que “*en distintas oportunidades, la diplomacia pública ejercida desde la oficina (OACNUDH) se encaminó hacia un señalamiento improductivo*” y añade, “*recibimos relatores que llegaban al país con informes preconcebidos que no*

cambiaban al conocer directamente la realidad”. Estas declaraciones, apenas tres meses antes del plazo para la renovación del mandato de la Oficina, produjeron malestar e inquietud dentro de la sociedad colombiana.

Tras petición de la Comisión de DDHH de

Naciones Unidas al Alto Comisionado, la Oficina se crea el 29 de noviembre de 1996 por acuerdo entre el gobierno colombiano y la ONU. Desde 1997 ha realizado más de 1300 misiones al terreno, o sea más de 1500 días de presencia en diferentes regiones, departamentos, municipios y veredas de Colombia. Según un pronunciamiento de la sociedad civil colombiana “*Las recomendaciones han alcanzado importantes resultados: han ofrecido al estado colombiano posibilidades de acción para superar la crisis de derechos humanos, se han convertido en una exigencia a los grupos armados en materia de respeto a la población civil, han sido útiles para crear espacios de interlocución entre la comunidad internacional, el Estado colombiano y la sociedad civil y han orientado el esfuerzo para que ese diálogo fructifique en la*

formulación e implementación de políticas públicas favorables al respeto, la protección y la realización de los derechos humanos.”¹

Este pronunciamiento se enmarca dentro de varios que se hicieron desde la comunidad internacional (como la declaración de la Presidencia de la Comisión de DDHH impulsada por la Unión Europea² o de miembros del Senado de EEUU³) apoyando las propias declaraciones de la Alta Comisionada Louise Arbour sobre la necesidad de renovar el mandato integral de la Oficina.

OACNUDH ha cumplido su cometido durante sus nueve años en Colombia con imparcialidad, independencia, objetividad y transparencia como indica su mandato. Por ello, **PBI ve con preocupación el impacto que un cambio en las funciones y/o mandato de la Oficina pueda tener en la protección de los DDHH en Colombia** como adelantó el vicepresidente⁴ tras anunciar finalmente su mantenimiento por otro año. En este sentido, cabe preguntarse ¿cómo quedará la función de observación del mandato? En base a nuestra experiencia en la protección de defensores de DDHH y comunidades de población desplazada, PBI considera que el papel de observación que OACNUDH materializa en sus informes, recomendaciones y comunicados públicos es una parte imprescindible de su mandato. Sin estas herramientas, el acompañamiento de la comunidad internacional a la situación de DDHH en Colombia se verá claramente obstaculizado.

¹ Pronunciamiento de la sociedad civil colombiana a favor de la continuidad de la oficina en Colombia del alto comisionado de las naciones unidas para los derechos humanos con su mandato integral. (incluyendo varios sectores como las universidades, iglesia, plataformas de ONGs de derechos humanos, partidos políticos y sindicatos) (Fecha Julio 5 de 2006).

² (Fecha: Junio 26 de 2006)

³ Carta de los Senadores estadounidenses Leahy y Dodd a Louise Arbour (Fecha: Septiembre 08 de 2006)

⁴ “Mirar qué ajustes necesita el mandato y poder darnos el tiempo necesario para negociarlo con toda tranquilidad.” Anuncio de la extensión por año del mandato de la Oficina de la Alta Comisionada. (Fecha Septiembre 12 de 2006).

Aumenta el acoso

Durante 2006 han crecido las amenazas contra defensores de derechos humanos dándose además la combinación de distintos tipos: robos de información¹, correos electrónicos², seguimiento³, detención arbitraria⁴, desaparición y asesinato⁵. La mayoría de las amenazas fueron reivindicadas por un grupo de ex Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) llamado “Autodefensas Colombia libre” integrado por los bloques Sur Caribe, Llanos, Centro, Capital, Oriente, Nueva Generación y Pacífico, según firman en sus correos. Correos en los que, por cierto, muchas veces hacen referencia al apoyo que tienen de las fuerzas armadas de Colombia y del presidente Álvaro Uribe sin que nunca se haya desmentido por parte del gobierno. Así lo manifestó la propia presidencia de la Comisión de Derechos Humanos: “El Gobierno debería hacer además un reconocimiento público del papel positivo y crucial que desempeñan los defensores de los derechos humanos y las organizaciones no gubernamentales en general en el fortalecimiento de la democracia. Debe resaltarse la manera en que las organizaciones no gubernamentales contribuyen al estado de derecho.”⁶

PBI ha podido comprobar en su trabajo con el cuerpo diplomático e instituciones internacionales que la preocupación por las condiciones de seguridad de los defensores fue compartida y subrayada en varios pronunciamientos públicos.



PBI acompañando a un miembro de CCAJAR, una de las organizaciones amenazadas

*La Unión Europea expresó en rueda de prensa su profunda preocupación por la “reciente intensificación de amenazas y ataques contra reconocidas organizaciones y personas defensoras de los derechos humanos por parte de grupos ilegales”⁷.

*Por su parte, la **Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos** (OACNUDH) expresó también su preocupación por “el hecho de que algunos servidores públicos formulen declaraciones orientadas a descalificar las actividades de los defensores o a minimizar las amenazas por ellos recibidas”⁸.

*La **Comisión Interamericana de Derechos Humanos** (CIDH) llamó “al Estado a redoblar sus esfuerzos orientados a la protección de los defensores y defensoras (...), a asegurar que cuenten con las garantías necesarias para continuar con su actividad en defensa de los derechos humanos (...) mediante el esclarecimiento judicial de la verdad”⁹.

Sin embargo, al cierre de esta edición, PBI no tuvo conocimiento de avances concretos en las investigaciones adelantadas por el estado colombiano, sino que se han ido sumando nuevas amenazas¹⁰ del mismo grupo detallando fechas para actuar y direcciones de varias organizaciones aumentando la inseguridad entre el movimiento de derechos humanos. Las organizaciones lamentan que, a pesar de este clima de hostigamientos, nunca pudieron obtener una reunión con el presidente Uribe. Así las cosas, **PBI hace un llamamiento a**

la comunidad internacional para que se pida el esclarecimiento de estos hechos en su interlocución con el estado colombiano con el fin de depurar responsabilidades, garantizándose la seguridad de los defensores de derechos humanos.

FEDEFAM, 25 años de lucha

En Bogotá y bajo la consigna “25 años de lucha, ni desaparición forzada ni impunidad”, la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (Fedefam) realizó en julio su XVIII Congreso con la presencia de representantes de distintos países y organizaciones internacionales como PBI. En este encuentro se eligió una nueva directiva y se evaluó la situación de la desaparición forzada y la impunidad en la región. Fedefam está a la espera de la celebración de una pronta Convención sobre Desaparición Forzada para la cual sólo falta el visto bueno de la Asamblea General de Naciones Unidas (Nueva York, diciembre de 2006) y, finalmente, la ratificación por parte de veinte Estados Miembros. El Congreso de Fedefam invitó a continuar la lucha por la verdad, la justicia y la recuperación de la memoria histórica siguiendo el camino iniciado hace 25 años contra la impunidad.

Hacia una Comisión Ética

Bogotá acogía en julio el Tercer Encuentro Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado con la participación de más de un millar de delegados llegados de muy diversos puntos del país para unir esfuerzos en su lucha contra la impunidad. Para Iván Cepeda, miembro de la Fundación Manuel Cepeda, suponía un paso importante cuantitativamente (por el aumento de participantes y la extensión del movimiento a nuevas regiones como el Magdalena Medio, los Santanderes, Sucre y Antioquia) pero también cualitativamente porque cada vez se denuncia con voz más alta y clara. Los presentes, además de mostrar su disconformidad con la Ley de Justicia y Paz, buscaron nuevas vías de actuación y entre las ocho propuestas extraídas del encuentro cabe destacar la **creación de una Comisión Ética** a diez años, formada por 25 reconocidas personas y organizaciones nacionales e internacionales, que mantendrá viva la memoria de las víctimas, buscando el esclarecimiento de los hechos, la sanción de sus responsables y la reparación integral de las víctimas.

Con algunas de ellas, PBI compartió impresiones:

¹ Robo de computadores portátiles en la oficina de CODHES y en la casa de un integrante del Colectivo de abogados José Alvear Restrepo CCAJAR (26 de abril de 2006).

² Varios correos enviados por “Colombia libre para siempre de la izquierda” presentándose como AUC llegaron a las oficinas de CCAJAR, ONIC, ILSA, MINGA, CUT, OFP, USO, IPC, Anthoc, varias universidades (Fechas: 8, 17, 20, 23 y 24 de mayo de 2006, 14 de junio y 4 de agosto).

³ Al escolta de confianza de Iván Cepeda (Mayo 2006)

⁴ A Príncipe Gabriel Gonzales Arango, coordinador de la seccional Santander del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) (4 de enero de 2006)

⁵ El 21 de Marzo de 2006, Yamile Agudelo integrante de la Organización Femenina Popular (OFP) fue desaparecida y su cuerpo fue encontrado en un basurero el 22 de marzo 2006.

⁶ Recomendación 300 de la Presidencia de la Comisión de Ginebra durante el periodo 2002-2006.

⁷ Nota introductoria por parte de la Presidencia y de la Delegación de la Unión Europea sobre las preocupaciones por amenazas a defensores de derechos humanos (23 de mayo de 2006).

⁸ Comunicado de prensa OACNUDH (8 de junio de 2006).

⁹ Comunicado de prensa CIDH no 21/06 (16 de junio de 2006).

¹⁰ Comunicado de CAJAR (Fecha Septiembre 18 de 2006).



Don Petro

Enrique Petro Hernández nació hace 67 años en Montería, Córdoba, pero echó raíces en una finca de Andalucía junto al río Curvaradó, en el Chocó. Allí, junto a su mujer y 9 hijos, criaba ganado y cultivaba. Hoy sólo tiene un pequeño rincón para subsistir en medio de inmensas plantaciones de palma aceitera. Sus vecinos, 44 familias, ni siquiera han corrido esa suerte. Los que quedaron vivos tuvieron

que huir amenazados por grupos paramilitares. Junto a Justicia y Paz, algunos de esos vecinos comenzaron este año el regreso a sus tierras. Mientras dura la lucha, don Petro les ha prestado un trozo de tierra para vivir. Allí, juntos, enfrentan nuevas amenazas y esperan que algún día les devuelvan lo que legítimamente les pertenece. Ha viajado en autobús hasta Bogotá para participar en el III Encuentro Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado. Así ha relatado a PBI su experiencia.

-No sé si se identifica con la palabra víctima, algunos no, pero ¿cómo resumiría usted su vivencia como víctima, en general del conflicto armado y en particular del estado?

Sí, somos víctimas. ¡Y víctimas del Estado!. ¡Mandaban grupos armados para arrebatar las tierras! Y con ellas a nuestra gente. A mí los paramilitares me mataron un hijo y un hermano. Y la guerrilla otro hijo, y eso que nos señalaban como colaboradores. Como yo no vendía me mandaron paramilitares a casa y eso es lo que pintaban en mis paredes.

-¿Qué ha supuesto este Encuentro Nacional de Víctimas? De todo lo hablado ¿qué ha sido lo más importante para usted?

Nos dijeron que empezaremos pronto a recuperar nuestros territorios y que comenzarán a pagarnos todos los perjuicios. A mí me han estimado pérdidas en 900 mil millones de pesos por lo que tenía y por la producción estimada que todo ello hubiera generado. Pero me preocupan casi más mis vecinos que están pasándolo mal regados por ahí. Este encuentro ha sido emocionante por ver a tanta gente denunciando junta, eso significa que se está perdiendo el miedo a hablar. Y eso es bueno.

-¿Qué significan para usted las palabras Verdad, Justicia y Reparación?, ¿cómo cree que, en su caso concreto, podría hacerse justicia a lo que usted ha vivido y cómo podrían, si pueden, repararle en alguna medida todo lo que ha perdido?

Los hijos no se pagan. Y yo no quiero más que lo que sea justo.

-¿Dónde o en quiénes (instituciones, organizaciones, entidades...) se han podido apoyar todo este tiempo para seguir luchando y qué ayudas han echado de menos?

Al principio acudimos a la Defensoría y sus palabras fueron muy bonitas hasta que hablaron con los palmeros. Entonces su actitud cambió. Un día empezaron a llegar internacionales y ellos me contactaron con Justicia y Paz. Ellos me han ayudado, me han dado viáticos y... esperanza. Y el apoyo de los internacionales ha sido un gozo para mí, no me siento tan solo, me hacen sentir más seguro y han tenido mucho amor conmigo y mi gente.

-¿Hacia dónde cree que se dirige ese proceso? ¿Es optimista?

Creo que vamos hacia la recuperación de tierras. Pero es un proceso complicado. Y además, aunque recuperemos la tierra, las palmas la han echado a perder. Tendremos que voltearlas con máquinas y empezar otra vez todo. Las palmas no son para nuestras tierras y no las queremos en ellas.

-¿Cuál es, en su opinión, la mayor asignatura pendiente en DDHH del gobierno?

Está acabando con los campesinos. Al presidente sólo le interesan los terratenientes. Si me matan no lo harán para robarme, sino porque no me quieren dejar robar.

-Un deseo para el futuro de sus nietos.

Que podamos volver a trabajar la tierra como antes.

Libertad Sánchez es portavoz de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Mérida (España) y vino al Encuentro invitada por Justicia y Paz (organización acompañada por PBI) para contrastar lo sucedido entre las víctimas del franquismo español y las víctimas del conflicto armado colombiano.

¿Qué paralelismos y qué diferencias encuentra entre el proceso en su país y en Colombia?

Digamos que se han modernizado las técnicas del crimen. Por lo demás, existen muchos paralelismos. En ambos regímenes se lucha contra la izquierda. Y la cobertura internacional de Uribe es muy parecida a la que tenía Franco. Claro que aquello era una "dictadura"...

La lucha no es nada fácil, por el contrario es muy frustrante en ocasiones. Después de décadas ¿a qué se siguen aferrando los familiares para continuar esta labor?

Necesitamos cerrar el duelo. Hay más de 20.000 cuerpos desaparecidos aún en España y sus familiares no han podido ni enterrarlos ni llorarlos.

¿Qué supone, en base a su experiencia, la realización de estos encuentros y la toma de medidas como la Comisión Ética que aquí se plantea?

En situaciones así, toda la información que se comparta es poca. Queremos que no repitan nuestros errores. Nosotros tardamos demasiado en ponernos a recoger testimonios. Apenas quedan testigos y los que hay son muy ancianos o están enfermos. Aquí aún pueden hacerlo.

En todos los años de trabajo de la asociación ¿cuál ha sido su mayor atisbo de esperanza?

Quizás ahora. Se está debatiendo en el Senado una posible Ley de Recuperación de la Memoria Histórica que recogería el apoyo institucional a grupos de trabajo para la búsqueda de testimonios y fosas así como para la exhumación, identificación y sepultura de cadáveres. Eso para nosotros sería un paso importante.

Y, por el contrario, ¿el mayor golpe, la mayor decepción?

El anterior presidente, José M^a Aznar, dijo en el Congreso que el nuestro era un "movimiento que olía a naftalina". Y decía esto mientras gastaba millones en repatriar cuerpos del régimen caídos en combate en Rusia. Eso fue doloroso.

¿Cómo ve que países tan diferentes y en momentos históricos distintos puedan compartir como aquí hoy sus experiencias?

Supone cierto amparo siempre el poder compartir. Pero no deja de ser un tanto frustrante que décadas después se repita la historia en otro lugar del mundo.

¿Se han sentido solos en su lucha? ¿Han tenido apoyo de la comunidad internacional?

El Comité de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE) aprobó por unanimidad en París una propuesta de condena internacional de las violaciones del franquismo. Puede que no tenga mucha aplicación pero sí supone un reconocimiento a las víctimas.

Es su primera visita a Colombia, ¿qué le ha llamado más la atención?

La imagen que dan los medios de comunicación fuera de Colombia sólo habla de los crímenes de la guerrilla, pero nunca de las víctimas de los crímenes del estado. El dolor de las víctimas es parecido aquí y allá.



Libertad Sánchez



Rueda de Prensa de la Misión de Verificación

Este mes de septiembre se llevó a cabo la **Misión Internacional de Verificación sobre la Situación Humanitaria y de DDHH de los Pueblos Indígenas de Colombia** conformada por organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil de Europa, América Latina, Estados Unidos, y Canadá, con observadores de las agencias de las Naciones Unidas, la Embajada de Suiza, la Embajada de Alemania, una delegación de la Comisión Europea y la MAPP-OEA. Una visita que recorrió Arauca, Córdoba, Sierra Nevada, Cauca y Guaviare y sirvió para poner sobre la mesa las constantes violaciones de DDHH y DIH que vienen padeciendo los indígenas del país,

más de un millón repartidos en 80 grupos étnicos de los que, al menos, 18 están ya en peligro de extinción. Estos pueblos, “guardianes del medio ambiente, de clara vocación pacífica” denuncian que están siendo acosados por todos los actores armados, fuerza pública, guerrilla y paramilitares (incluso los supuestamente desmovilizados) así como por megaproyectos transnacionales para cuya puesta en marcha nadie les pide consentimiento. Entre las 10 recomendaciones redactadas como conclusión, la Misión insta al Relator Especial de la ONU para los DDHH y libertades de los Pueblos Indígenas a realizar una pronta visita de seguimiento con miras a exigir al estado colombiano respuestas ante la que consideran una “agudización de la crisis humanitaria de las comunidades indígenas en Colombia”.

KANKUAMOS: Recuperación cultural en medio de la violencia

Los indígenas kankuamos habitan la Sierra Nevada del norte de Colombia. Si durante siglos han sufrido distintas colonizaciones, en los últimos años han sido especialmente golpeados por la violencia de grupos armados. En 2003 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) les otorgó medidas cautelares solicitando al gobierno la toma de acciones para preservar su integridad personal y territorial pero, en vista del incumplimiento estatal, en 2004 decretaron medidas provisionales para intentar garantizar su protección. La Corporación Colectiva de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR) les ha apoyado en el camino. PBI ha acompañado a CCAJAR en sus viajes a territorio kankuamo y habló con el líder Wilmer Daza, desplazado en Bogotá, sobre la situación actual de su pueblo y su proceso de recuperación cultural en medio de la violencia.

- ¿Cómo es la situación de los kankuamos en la actualidad?

La presencia de grupos armados –ejército, paramilitares y guerrilla- y su disputa por el territorio ha provocado muertes, desapariciones y desplazamientos. A raíz de las medidas cautelares y provisionales de la CIDH, se restableció un poco el orden público pero el ejército continúa violando nuestros derechos.

- ¿Cuántos años llevan en esta situación?

El desplazamiento empezó en 1998 con la primera incursión armada de las AUC aunque ya antes la guerrilla había desplazado a algunas personas. Pero es a partir de 2002 cuando hay una retaliación directa por parte de las AUC contra la población. De 7000 habitantes en 1998 bajamos a 3000 en el 2004, es decir que más del 50 % de la gente tuvo que desplazarse. Algunos han regresado pero eso implica someterse a toda clase de situaciones.

- ¿Cómo ha sido posible el regreso?

Gracias al trabajo de organizaciones sociales y al apoyo internacional. El fallo de la CIDH permitió visibilizar nuestra situación y la de otras comunidades en la Sierra.

- Como líder comunitario denunció violaciones de DDHH y del Derecho Internacional Humanitario por parte de los actores armados, ¿qué supuso para usted ese papel?

Cuando tuvo lugar la muerte de Víctor Hugo Maestre me tocó denunciar a la Fuerza Pública. Sacamos un comunicado pensando

que lo habíamos enviado al presidente, pero le llegó al coronel Figueroa del Batallón de la Popa quien respondió “Cada día le llegan miles de comunicados como éste al presidente y yo le tengo mil respuestas”. Dijo entonces que éramos “encubridores” de la guerrilla. Así comienza el temor con la Fuerza Pública. Luego ya tuve un atentado. Una noche un grupo de armados vestidos de civil vinieron buscándome a casa pero por suerte llegaron unos vecinos y se fueron. Un mes después, un miembro de las AUC se me acercó diciéndome que tenía que cuidarme, porque donde diera papaya, me iban a matar. Todo esto lo denuncié frente a las Fuerzas Armadas y la opinión pública. Tras la misión de seguimiento de las medidas de la CIDH, se ordenó un estudio de riesgo para mí y a los ocho días me detuvieron con otras catorce personas. En las audiencias tuvimos el apoyo del Colectivo y la presencia de PBI. Finalmente el juez falló a nuestro favor. El mismo día que me dieron la libertad, el 15 de diciembre del año pasado, un preso paramilitar me dijo que no podía volver al territorio, que él mismo tenía orden de matarme pero que ahora había ganado su aprecio. De ahí tuve que venirme a Bogotá.



Wilmer Daza

- Hoy día camina por las calles bogotanas vendiendo las tradicionales mochilas de su pueblo y sigue trabajando por la comunidad. Como usted, muchos kankuamos han tenido que abandonar la tierra. ¿Qué implica para ustedes?

Para un kankuamo, dejar la tierra significa acabársele la vida. Tener que salir de ahí es no saber qué hacer. Hemos tenido que volvernos comerciantes, pero uno no sabe cómo vivir acá. Ser desplazado es prácticamente olvidar costumbres ancestrales. También significa ser discriminado: a los desplazados se les mira como “delincuentes”.

- ¿Pero ustedes tienen la ventaja de estar organizados?

Trabajamos no sólo por la supervivencia aquí, sino para fortalecer el territorio con acciones que llevamos a cabo. Nos mantenemos casi como una familia kankuama.

- La lucha por la recuperación de su cultura, reprimida durante más de 200 años, ha ido de la mano de su lucha por el territorio, tanto por el reconocimiento del resguardo (que fue establecido en 2003), como por la ampliación de las zonas. ¿Cómo han vivido todo este proceso?

La iglesia nos dijo que creer en Kakerankua (el dios de los kankuamos) era como creer en el diablo y se tenía que hablar la lengua a escondidas. Los mismos jóvenes kankuamos llegaron a rechazar la lengua y el vestido. Sin embargo, en 1982 se crea el Festival Folklórico de la Sierra Nevada y de ahí surge todo un proceso de recuperación.

Violaciones de DDHH
por razones económicas

Continúan presiones por la palma aceitera

El ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, ha anunciado la devolución de más de 25.000 hectáreas ocupadas ilegalmente por palmicultores en la zona chochoana comprendida entre los ríos Jiguamiandó y Curvaradó a sus propietarios históricos: comunidades a las que, según la Defensoría, les fueron usurpadas mediante, entre otras, amenazas y desplazamientos forzados. Este anuncio provocó ciertos recelos entre algunos palmicultores de la región que acusan a los internacionales y a la Comisión de Justicia y Paz de propiciar el desempleo, la miseria y el regreso de la violencia a la zona¹ fomentando acciones como la del ministro. Algunos de los propietarios legítimos, como Enrique Petro, ya han recibido amenazas directas por parte de paramilitares en las que advierten: “en este momento no es posible tocar a Don ENRIQUE PETRO porque anda con los gringos y los acompañantes, pero se va a tocar lo que a él más le duele, sus hijos, su familia”² -ver entrevista en página 5-. Es sólo un ejemplo de lo que continúa sucediendo en muchas zonas del país donde las comunidades indígenas y afrodescendientes se están viendo hostigadas y desplazadas para permitir la implementación de proyectos de explotación agroindustrial.



Voluntaria PBI junto a miembro de JYP en una de las plantaciones de palma aceitera.

¹ Informe 72, Jiguamiandó-Curvaradó, Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, 21 de julio de 2006

² Informe 75, Jiguamiandó-Curvaradó, Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, 22 de septiembre de 2006

Impunidad

“La impunidad ha dolido desde el primer momento hasta este último suspiro”

El 30 de agosto se cumplía el 19º aniversario de la muerte de Nydia Erika Bautista -desaparecida a manos militares en Bogotá en 1987-. En esta fecha señalada, su hijo Eric Bautista, miembro del movimiento ‘Hijos e Hijas por la memoria contra la impunidad’ quiso compartir con PBI su testimonio.

El próximo año se cumplen dos décadas de la desaparición de su madre ¿cómo se vive tanto tiempo en esa lucha?

La lucha contra la impunidad es una lucha histórica de la humanidad, mi familia llevamos apenas 20 años. No sólo ha de castigarse a los culpables sino que debe hacerse una revisión histórica de causas y consecuencias de estos crímenes. Que la sociedad reevalúe como actuar frente a este tipo de acciones que socavan profundamente la dignidad humana.

Mi familia y yo hemos vivido el desarraigo, el destierro, la incompreensión, la soledad del exilio. Esas tristes situaciones también nos han fortalecido y nos han enseñado que la vida vale la pena vivirla cuando se busca transformar las condiciones de represión, exclusión y miseria que viven millones de seres humanos. Entendemos que hemos asumido un compromiso con la vida y por eso seguimos enfrentándonos aún a las estructuras de poder que mantienen a los criminales gozando de beneficios y a las víctimas en el más profundo de los olvidos.

El paso de los años sólo ratifica que lo que vivimos es consecuencia de lo que vivieron nuestros antepasados, de lo que han vivido los indígenas, los campesinos, los estudiantes, todos aquellos que han levantado sus voces contra la opresión. Por ello debemos impedir con todas nuestras fuerzas que esto siga ocurriendo.

Han pasado años de la muerte de sus familiares pero continúan trabajando por sacar a la luz la verdad de los casos ¿la impunidad duele más con el paso del tiempo?

La impunidad ha dolido desde el primer momento hasta este último suspiro, duele saber que después de tanto tiempo de denuncias e intentos por acceder a la justicia, el laberinto se hace más complejo y va teniendo más posibles puertas falsas. Vemos como siguen desapareciendo personas

todos los días y no hay mecanismos de prevención efectivos. A mí me duele igual que desde el día en que se la llevaron porque ella ya no está más.

Los últimos casos reabiertos como el del Palacio de Justicia o los descubrimientos de las fosas comunes ¿no son muestra de una voluntad estatal de buscar la verdad?

Los restos de mi madre fueron encontrados en un cementerio de N.N’s de personas que enterrarán sin identificación plena, pero no se realizaron acciones para identificar los otros cuerpos encontrados allí; lo de la identificación de los cuerpos de las fosas comunes no significa que eso conduzca a la justicia para las víctimas. En cuanto al Palacio, no se han dado aún resultados efectivos, sólo son se-

ñales, no acciones reales de reparación. La verdad ha sido escrita en varios libros, la vimos salir con vida del palacio, la verdad ha sido ocultada y quizás se encuentra en las cenizas de aquel palacio incendiado por los militares. Quizás en aquella sentencia final del memorable presidente de la corte suprema de justicia Dr. Reyes Echandia: “que el presidente dé la orden de cese al fuego”.

El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado ha sido blanco de amenazas últimamente, es el caso de otro de los miembros de “Hijos” y acompañado por PBI, Iván Cepeda, quien también este mes de agosto conmemoraba el 12º aniversario del asesinato de su padre, el senador Manuel Cepeda. ¿Cuál es la situación de seguridad/inseguridad que viven los miembros de “Hijos”?

La situación de Hijos e Hijas es igual a la de miles de colombianos que, como decía el maestro de maestros Sr, Eduardo Umaña Luna, “todo hombre que se presente al país para el cambio sociopolítico está condenado a muerte”.



Eric Bautista

Reelección en medio de controversias nacionales

En agosto, Álvaro Uribe tomó posesión de su cargo como presidente tras haber sido reelegido en los últimos comicios generales. La reelección sólo fue posible tras la modificación ad hoc de la Constitución de 1991, impulsada por el mismo presidente. Según miembros del Partido Liberal, se necesita una reforma amplia que reestablezca equilibrios de poderes y la separación entre éstos.

Falta de claridad en la desmovilización de los grupos paramilitares

Esta reelección sigue enmarcada en el contexto de negociación con los grupos paramilitares. La Corte Constitucional publicó en julio el texto final de su fallo sobre la ley 975 de 2005, llamada de “Justicia y Paz”, declarando exequible la ley pero exigiendo algunas modificaciones para su validez:

- El tiempo que los desmovilizados hayan pasado en la zona de concentración de Santa Fe de Ralito (Córdoba) no cuenta como parte de la pena que puedan recibir.
- Los paramilitares que se acojan a la ley deben confesar la totalidad de sus delitos o si no perderán los beneficios jurídicos de la ley.
- La reparación a las víctimas se hará con bienes obtenidos ilícitamente pero también con los lícitos.

Desmovilización de grupo paramilitar (Foto Surimages)



- Las víctimas pueden intervenir y estar informados de todo el proceso legal. Además de los directamente afectados, sus familiares también serán considerados víctimas.
- No fue aceptado considerar el hecho de ser paramilitar como delito de sedición, es decir, como delito político.

Estas condiciones provocaron una nueva crisis y hasta Ernesto Báez –jefe político de las AUC- manifestó públicamente que el fallo suponía un “golpe mortal” al proceso. Tanto es así que el gobierno, trasladó a varios jefes paramilitares a un centro vacacional de Antioquia, mientras trabajaba en los borradores de decretos que matizaran las condiciones de la Corte; aquellas que, como recogía el diario El Tiempo, “no gustaban a los paramilitares”. A pesar de todo, el decreto publicado finalmente en septiembre “no resucita, como en el borrador, el delito político. Habla de confesión completa y veraz y pide que el bloque responda cuando los bienes del desmovilizado no alcancen. “Perdonarán” a los testaferros” (El Tiempo, 30 sept.2006). -Cabe recordar no obstante que, en todo caso, **la ley sólo afectaría a 2.695 desmovilizados registrados por el gobierno, quedando en principio exentos de todo proceso judicial más de 28.000** -. El país vivió al ritmo de debates, discursos públicos, editoriales y columnas de opinión. Los temas ‘estrella’: la impunidad para los victimarios de crímenes de lesa humanidad y la inclusión

de narcotraficantes (pedidos en extradición por EEUU) en las listas de paramilitares beneficiados por la ley, como es el caso de Juan Carlos Sierra o Víctor Manuel Mejía. Por otro lado, nuevos grupos autodenominados paramilitares -e incluso bajo el nombre de grupos ya supuestamente desmovilizados- están enviando amenazas a organizaciones y personas activas del movimiento social (es el caso, entre otros, del Movimiento de Víctimas, distintos sindicalistas o la Universidad Externado de Bogotá). Conti-

núan pues abiertos muchos interrogantes. El Tiempo, en su editorial del 7 de septiembre, resumía la situación advirtiendo que “*la falta de claridad que ha rodeado el proceso paramilitar hace dudar de que no sólo habrá poca justicia, sino poca verdad y reparación*”. Veremos.

¿Salpicadas las fuerzas armadas?

Los periódicos han llevado estos meses a portada diversos escándalos que involucran a miembros de las Fuerzas Armadas así como de la Fiscalía Nacional y el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Como ejemplo, se ha reabierto contra miembros de la Fuerza Pública el caso del Palacio de Justicia (21 años después) gracias a un video de aquel momento que evidencia cómo uno de los 11 desaparecidos, el administrador de la cafetería, Carlos Rodríguez, es sacado del edificio por un miembro del Ejército, sin



Palacio de Justicia -Bogotá

que hasta ahora hayan aclarado qué hicieron con él y sus diez compañeros. Pero no ha sido el único: 14 militares fueron detenidos por el caso de torturas contra 21 soldados en un campo de entrenamiento del Tolima; por otro lado, salieron a la luz pública sospechas de supuestos montajes de atentados por parte del Ejército mientras el gobierno decía que realizaban labores de inteligencia; e incluso se habló también de un falso rescate del GAULA del Ejército (grupo antiseccuestro) que terminó con 6 muertos.

PBI BARRANCABERMEJA

Buscando medidas de defensa propia

PBI acompañó al Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez (CALCP) al Catatumbo con motivo de la Asamblea General de la Asociación de los indígenas Motilón Bari (ASOCBARI) celebrada en julio. El Colectivo trabaja en la protección de sus derechos e imparte formación a los líderes de las comunidades -más de una veintena con un total de 419 familias-. La riqueza de recursos naturales del área (petróleo, carbón, esmeraldas, uranio y gran biodiversidad) viene atrayendo el interés de multinacionales que han llegado a la zona acompañadas de grupos militares y paramilitares, dando lugar a episodios de violencia física y verbal contra las comunidades.

Militarización en el Sur de Bolívar

El municipio de Santa Rosa, en el Sur de Bolívar, fue el escenario en agosto de la pre-audiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos en la que se analizaba el estado de salud de la minería en la región. Según las organizaciones convocantes, la transnacional KEDHADA ha conseguido licencias en la zona para extracción de oro y, para salvaguardar sus actividades, ha llegado acompañada de presencia militar y paramilitar tanto en la serranía como en los núcleos de San Pablo, Santa Rosa y Simití. PBI, que asistió al acto acom-

pañando a la Organización Femenina Popular en calidad de observadores internacionales, escuchó los testimonios de la población minera denunciando los hostigamientos que padecen, desde bloqueos hasta tortura y asesinato de líderes mineros, como Alejandro Uribe, sindicalista de Fedegromisbol (Federación Agrominera del Sur de Bolívar), asesinado el 19 de septiembre por miembros de la Quinta Brigada del Ejército Nacional, según reconoció su comandante José Joaquín Cortés. Una muerte lamentada públicamente por la Mesa Internacional de Complementariedad del Magdalena Medio en la que PBI participa como observador internacional.

Marcha por la dignidad en San Onofre

PBI acompañó a Iván Cepeda en su visita a San Onofre, en el departamento de Sucre. El periodista colombiano, fundador de la Fundación Manuel Cepeda, acudió a la zona como representante del



Iván Cepeda junto a voluntaria en marcha de San Onofre.

Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado para participar en una marcha de reivindicación de verdad, justicia y reparación organizada el 26 de agosto por las víctimas del paramilitarismo en la zona.

Comisión Intersectorial por la Vida en el Magdalena Medio

Como observadores en la Mesa Internacional de Complementariedad del Magdalena Medio, PBI asistió en septiembre a la reunión de la Comisión Intersectorial por la Vida, convocada por miembros del Espacio de Trabajadores y Trabajadoras de Derechos Humanos (ETTDH) de la ciudad de Barrancabermeja. En este encuentro, además de autoridades locales, civiles y militares, participó el vicepresidente Francisco Santos y el director del programa presidencial de DDHH y DIH, Carlos Franco, así como delegados del Ministerio del Interior, la Fiscalía, Procuraduría, Defensoría, la OEA, Naciones Unidas, Unión Europea y varias embajadas y organizaciones internacionales como Christian Aid, Diakonia Suecia, CIVIS, Red de Hermandad, etc. El principal acuerdo fue la creación de un mecanismo permanente que acogerá a todos los sectores locales, regionales y hasta internacionales para “revisar la situación de Derechos Humanos y acordar estrategias de trabajo conjuntas”. Un proyecto en el que, por cierto, el gobierno nacional se comprometió a participar trimestralmente.

PBI BOGOTÁ

Araucanos, en medio del fuego cruzado

PBI asistió como observador internacional al aniversario de la muerte de tres líderes sociales, asesinados hace dos años en Caño Seco, Arauca. En la conmemoración, además de familiares y vecinos, participaron miembros de varias ONG como MINGA o CCAJAR, a quienes también se acompañó en septiembre a la zona para la realización de talleres sobre violación de DDHH. PBI mantuvo diversos encuen-

tros con la Brigada XVIII, la Pastoral Social y la Defensoría del Pueblo en Arauca capital para hablar de la situación de los defensores en el área. No en vano, el conflicto en la región es particularmente complicado puesto que no sólo se desarrolla entre el Estado y los grupos armados ilegales sino que hay una confrontación armada entre las guerrillas FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y ELN (Ejército de Liberación Nacional). La población viene padeciendo la militarización de la vida civil y son frecuentes las tomas de casas y escuelas

por parte de las fuerzas armadas, así como las amenazas, asesinatos y detenciones arbitrarias de defensores de DDHH, líderes sociales y populares, además del desplazamiento forzado de campesinos. Así lo recoge el Informe “ARAUCA: del 2004 al 1er Semestre de 2006”, presentado el 28 de septiembre por la Fundación Joel Sierra, en el que hacen un repaso pormenorizado de las ‘principales estrategias de guerra declaradas contra el pueblo araucano’. El petróleo sigue siendo un atractivo peligroso para el área.



⇒ PBI BOGOTÁ

¿Error militar?

El 10 de abril de 2004, se perpetró la masacre de cinco personas, entre ellas un bebé de seis meses, en la vereda Potosí, municipio de Cajamarca (Tolima), a manos de miembros del Ejército. En los días posteriores a la masacre, el presidente Álvaro Uribe anunció que fue un error militar. El subequipo de Bogotá ha acompañado a CCAJAR en sus diligencias y audiencias públicas de este caso emblemático, en las que un soldado confesó haber rematado a uno de estos campesinos fuera de combate, palabras que, según CCAJAR, “reafirman que los hechos de Cajamarca no fueron un error militar consecuencia de una operación, sino que la patrulla decidió realizar la ejecución”.

Desaparición forzada en Ciudad Bolívar

En los últimos meses, PBI Bogotá ha acompañado a la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (ASFADDES) y a la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políti-

cos (FCSPP) en varias actividades relacionadas con la desaparición del líder social Luis Antonio Arismendi, presidente del sindicato Sindim Manuela Beltrán, filial de la CGT. El 28 de abril, Arismendi (55) y Belquis Dayana Goyeneche (22) fueron desaparecidos en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá. El día anterior Arismendi había reportado a la policía local la presencia de personas en actitud sospechosa alrededor de su lugar de trabajo, denuncia que al parecer no provocó reacción alguna por parte de la Fuerza Pública. Sin embargo, al día siguiente fue desplegado un operativo policial en la zona en conjunto con los mismos “hombres sospechosos”. Poco después fueron encontrados dos cuerpos sin vida en Zipacón, a un par de horas de Ciudad Bolívar, que serían identificados como Arismendi y Goyeneche. En una denuncia del 15 de Mayo, firmada por

varias ONG acompañadas por PBI (ASFADDES, FCSPP, CCAJAR y OFP, entre otras) se afirmaba que “hechos similares efectuados por parte de la Fuerza Pública y grupos paramilitares, vienen sucediendo contra la población de Ciudad Bolívar y sus organizaciones sociales, sumándose a los asesinatos y desapariciones ocurridos en la localidad”.

OACNUDH, en un comunicado del 5 de junio, condenaba este crimen reiterando “su preocupación por la grave crisis que, en materia de derechos humanos, afrontan los pobladores del área” e instando a las autoridades sancionar a sus responsables. PBI ha acompañado a ASFADDES y FCSPP en diligencias en la fiscalía, a la ex-

humación en el pueblo de Zipacón el 9 de agosto y a la misa de conmemoración el 1 de septiembre.



Exhumación en Zipacón

PBI MEDELLÍN

“Cómo se le habla al desaparecido: Con la emoción apretando por dentro” (R. Blades)

En la vereda La Esperanza se habló el 20 de agosto de 17 personas, vivas aún en el recuerdo. Se desafió al olvido y a una década de impunidad en un evento organizado para conmemorar el aniversario de la masacre que hace diez años sesgaba en el lugar la vida de casi una veintena de personas.

PBI Colombia acompañó a la Corporación Jurídica Libertad, a la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y a la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos en la emotiva jornada de recuerdo que tuvo lugar en El Carmen del Viboral, en el Oriente Antioqueño, y en la que también estuvieron presentes otros acompañados de PBI como Iván Cepeda y el Padre Javier Giraldo. Una marcha, una ceremonia religiosa, teatro, música,



Placa conmemorativa en La Esp

PBI URABÁ

Ganando terreno

El equipo de PBI en Urabá está acompañando a la Comunidad de Autodeterminación Vida y Dignidad (CAVIDA) en el proceso de delimitación y visibilización de fincas que llevan a cabo los miembros de las zonas humanitarias de Nuevo Espacio y Nueva Vida, entre la serranía del Darién y el río Atrato, en la cuenca del río Cacarica. Estas zonas cercadas, en las que cultivan yuca, maíz, plátano y arroz, han sido su hogar desde el año 2000, cuando comenzaron el regreso tras tres años de desplazamiento forzado. Por razones de seguridad decidieron instalarse ahí temporalmente juntos hasta que pudieran recuperar las tierras de cada familia. Aunque aún no se ha conseguido, esta delimitación supone el primer paso para proteger sus territorios, codiciados por su biodiversidad –una de las más ricas del mundo- y por su importancia geoestratégica –por su cercanía con Panamá, es objetivo de proyectos de infraestructura como la construcción de la



Voluntaria PBI junto a malla de la zona humanitaria de Cacarica

carretera panamericana, e incluso, se habla, de un nuevo canal interoceánico y una red de transmisión eléctrica-. La riqueza del área les ha permitido enmarcar este proceso de delimitación de tierras en un contexto de protección medioambiental en el marco de acuerdos internacionales como el Protocolo de Kyoto y la Convención de Ramsar sobre

conservación y uso racional de los humedales. Cabe recordar que estas zonas humanitarias se encuentran, además, en territorio colectivo reconocido por la Ley 70 de 1993 sobre derechos de las comunidades afrodescendientes y, asimismo, están amparadas por medidas de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

beranza

danza, poesía y una lápida en la que se puede leer: “RESISTIR EN LA ESPERANZA TRAS UNA DÉCADA DE IMPUNIDAD”; en todo ello volvieron a estar los ausentes: dieciséis desaparecidos y un asesinado.

Víctimas contra el olvido en Medellín

Las organizaciones de víctimas de crímenes del estado y sus representantes participaron en la “V Jornada por los Derechos Humanos y contra la Impunidad” celebrada en Medellín entre el 4 y 9 de septiembre con el objetivo de impulsar iniciativas contra la impunidad y demandar respeto por parte del gobierno a los dere-

chos fundamentales. El encuentro fue organizado por el Colectivo de Derechos Humanos Semillas de Libertad (Codehsel), espacio en el que Peace Brigades International participa como observador internacional y que agrupa a varias ONG locales, algunas también acompañadas por PBI. Se pusieron sobre la mesa los efectos de la política de seguridad democrática desarrollada por el gobierno y sus implicaciones para la sociedad civil.

Entre los ejemplos, mencionaron la inclusión de ciudadanos en redes de informantes, la manipulación de los medios de comunicación y, como ya hiciera CJL en comunicados públicos y también OACNUDH en su informe anual, denunciaron las ejecuciones extrajudiciales cometidas por soldados de la IV Brigada en el Oriente Antioqueño, donde campesinos han sido asesinados y posteriormente vestidos de guerrilleros con el fin de mejorar sus resultados operacionales.

Fabiola Lalinde, representante en la seccional antioqueña de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos (Asfaddes), subrayó la ironía del gobierno colombiano que necesitó apenas tres días para reconocer los restos del jefe paramilitar Carlos Castaño pero tardó más de ocho años para encontrar el cuerpo de su hijo asesinado por el ejército y otros cuatro más para realizar su análisis de ADN.

El evento culminó con una marcha contra la impunidad y el olvido de los desaparecidos que congregó a alrededor de 400 personas.



Marcha contra la impunidad en Medellín

PBI INTERNACIONAL



Reunión PBI en Londres

- ◆ Laura Clarke, anterior coordinadora de PBI Colombia, es desde septiembre la nueva coordinadora internacional de PBI. Tiene a sus espaldas una amplia trayectoria junto a Peace Brigades International ya que también ha colaborado en PBI Reino Unido y fue voluntaria del subequipo colombiano de Medellín.
- ◆ PBI está ultimando el lanzamiento de su nueva página web para lo que se ha formado un grupo de trabajo especial. El nuevo sitio web facilitará la navegación y estandarizará los actuales sitios de los distintos proyectos.
- ◆ En el mes de septiembre se llevaba a cabo en Londres la conferencia interna e internacional sobre recaudación de fondos. Una cita que reunía a representantes de los cinco proyectos, de numerosos grupos nacionales, de la Oficina Europea y la Oficina Internacional con el fin de potenciar la coordinación y colaboración entre todas las partes.

PBI GRUPOS NACIONALES

Los grupos nacionales de PBI continúan celebrando diversos eventos sobre el trabajo de los defensores de DDHH y los efectos del trabajo de acompañamiento de PBI en el marco del 25° aniversario de la organización. Para información detallada, consultar las secciones nacionales dentro de la web www.peacebrigades.org



OFICINA EUROPEA DE PBI

PBI EN ÁFRICA

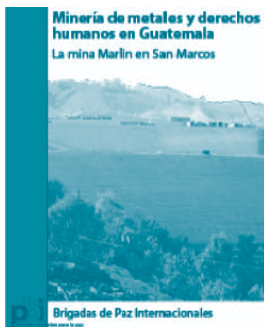


En julio, la BEO (Oficina Europea de PBI) realizó en Kinshasa (R.D.Congo) un seminario para defensores de derechos humanos de la región de los grandes lagos en África Central (R. D. Congo, Burundi, Rwanda y Congo Brazzaville) enfocado en estrategias y procedimientos de protección. El evento ofreció espacios de intercambio y construcción de redes tanto para los defensores mismos como con las autoridades estatales y organizaciones internacionales. Se contó con la presencia de altos funcionarios de la Unión Europea, de la ONU (Oficina de la Alta Comisionada para los DDHH en la R.D. del Congo y la misión MONUC), de la Comisión Africana de DDHH y de Derechos de los Pueblos así como con alrededor de treinta defensores de derechos humanos de diferentes países.

◀ Vista aérea de Kinshasa

OTROS PROYECTOS

◆ Guatemala:



Con su informe “Minería de metales y derechos humanos en Guatemala”, el proyecto presenta las experiencias de varias iniciativas (entre ellas varias acompañadas por PBI), como la de la Alcaldía Indígena de Solalá, el Colectivo Madre Selva y la Asociación de Amigos del Lago Izabal, que defienden los derechos de las comunidades indígenas de participar debidamente en la toma de decisiones sobre las exploraciones de minas en el país cuando afectan gravemente sus condiciones de vida, contaminan sus

reservas de agua, destruyen sus tierras y, además, contravienen convenios internacionales. (www.peacebrigades.org/guatemala/guatereports.html).

◆ Indonesia:

PBI fue invitada a presentar su trabajo en la conferencia quinquenal de la iglesia evangélica de Indonesia. (*Gereja Kemah Injil Indonesia, GKII*). Los equipos de PBI en este país ofrecen, además del acompañamiento tradicional, educación participativa de paz y convocan eventos culturales y espacios de intercambio para los defensores de derechos humanos locales. La situación en Aceh, Jayapura y Wamena, las zonas rurales donde PBI mantiene presencia, se encuentra más estable que en meses anteriores.

◆ México:

El proyecto México concluyó su plan estratégico a tres años, integrando en él las recomendaciones de la evaluación externa de la organización en 2004. Dentro de su estrategia el proyecto desarro-

lla, al igual que otros como Colombia, Guatemala e Indonesia, un concepto más amplio del acompañamiento internacional, incluyendo una forma de observación o monitoreo para aumentar el alcance y la eficacia del trabajo de PBI en el país. A nivel de coyuntura el proyecto ha vivido una época tensa alrededor de las elecciones presidenciales en México.

◆ Nepal:

Mientras la guerrilla maoísta y los partidos políticos continúan sus acercamientos, la sociedad civil - como en Colombia - debate los temas de impunidad, justicia y reconciliación después del cese de hostilidades. Pero, en contraste con la situación relativamente calmada en Katmandú, PBI en sus viajes de exploración a los distritos del oeste y oriente lejano del país observa que la situación de seguridad es precaria aún dentro de una situación que ya es calificada de “post conflicto”.

Representante PBI en E.E.U.U.

“Operación Dragón” en Washington

Berenice Celeyta, presidenta del NOMADESC y galardonada con el premio Memorial Robert F. Kennedy (RFK), visitó Washington D.C. durante el mes de septiembre para, entre otras cosas, actualizar informaciones sobre la “Operación Dragón”, un plan de exterminio reconocido internacionalmente en 2004 contra líderes de movimientos sociales, políticos, sindicalistas y defensores de derechos humanos.

El Memorial RFK, WOLA (Washington Office on Latin America) y PBI acompañaron a Celeyta en sus reuniones con varios congresistas, senadores, ONG y agencias internacionales a quienes pidió ayuda para instar al gobierno colombiano y a la Fiscalía a investigar y sancionar a los autores materiales e intelectuales de la operación para que no quede en la impunidad.

Un paso importante de apoyo a los defensores de derechos humanos como refleja el comunicado de la directora del RFK: “*Los defensores de derechos humanos en Colombia son señalados como terroristas y sometidos a numerosas amenazas de muerte. Los artífices de estas amenazas están actuando con total impunidad mientras el gobierno acusa falsamente a los defensores para detenerlos ilegalmente.*”



Celeyta y su hijo junto al Senador Alexander López y el Congresista Sam Farr.

Representante PBI en Europa

La Unión Europea rinde homenaje a los defensores de Derechos Humanos

PBI participa en la evaluación de las directrices para defensores de derechos humanos de la U.E.

El Consejo de la Unión Europea aprobó el pasado 12 de junio nuevas conclusiones sobre sus directrices para los defensores de derechos humanos en las que les rinde homenaje condenando los asesinatos a defensores y haciendo un llamado a los estados para asegurar su protección¹. Las conclusiones van acompañadas de un documento de evaluación del estado de aplicación de las directrices dos años después de que fueran aprobadas por el Consejo de la UE, en junio de 2004².

Evaluación de la aplicación de las directrices

A petición de la presidencia austríaca, PBI y otras organizaciones internacionales que trabajan en el ámbito de la protección a los defensores de derechos humanos, participaron en la evaluación de la implementación de las directrices. Además de las organizaciones de la sociedad civil y los mismos defensores, la consulta de la presidencia austríaca se extendió a las embajadas y cancillerías de los Estados Miembros con el fin de examinar los avances realizados. El estudio también toma en cuenta las recomendaciones presentadas por la Representante Especial de la ONU sobre defensores de los derechos humanos en uno de sus últimos informes.³

En su conclusión, el Consejo de la UE reconoce el “*enorme potencial de las directrices de realzar la eficacia de la actuación de la UE en apoyo a los defensores*” pero indica que “*sigue siendo difícil evaluar si han supuesto una diferencia apreciable*” y hace un llamado para la creación de un “*sistema central de seguimiento de los esfuerzos de la UE que permita efectuar un aná-*

lisis más exhaustivo de las repercusiones de la acción de la UE”.

Asimismo, la evaluación reconoce que uno de los principales obstáculos para la plena implementación de las directrices es la falta de conocimiento tanto de los mismos defensores como de muchas embajadas y oficiales de la UE. El documento recoge una lista de 64 recomendaciones dirigidas a las cancillerías, las misiones y embajadas en el terreno, el grupo de trabajo de DDHH del Consejo de la UE (Cohom) y las presidencias europeas en las que hacen hincapié en la necesidad de extender el trabajo de promoción de las directrices, de adoptar actitudes más proactivas o anticipativas por parte de las embajadas en el terreno, de abrir canales de diálogo más institucionalizados entre la comunidad de defensores locales y las embajadas y misiones de la UE en el terreno y de favorecer más activamente la financiación de aquellos que defienden los DDHH.

Una herramienta de utilidad

Las directrices⁴ forman parte del proceso de intensificación de la política de los derechos humanos de la UE en las relaciones exteriores y pretenden aportar sugerencias prácticas para mejorar la acción de la UE en materia de defensores y, concretamente, promover y estimular el respeto del derecho a defender los derechos humanos.

Estas directrices tienen como origen la declaración de la ONU sobre el *Derecho y el Deber de los Individuos, Grupos y las Instituciones a Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidas* del año 1998. La UE cuenta con otras directrices aprobadas con anterioridad sobre la pena de muerte, la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; sobre el diálogo en materia de derechos humanos con terceros países y sobre los niños y los conflictos armados.



Evento sobre Colombia en el Consejo de DDHH.

¹ http://www.protectionline.org/IMG/pdf/EU_conclusions_guidelines_HRD_120606.pdf

² <http://register.consilium.eu.int/pdf/es/04/st10/st10056-re01.es04.pdf#search=%2210056%2F1%2F04%22>
(E/CN.4/2006/95/Add.5).

⁴ <http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/web10056re01.es04.pdf>

“Colombia tiene... algo”

Gabo Arora es de origen hindú y ha vivido los últimos años en Nueva York. Allí se enamoró de la literatura de García Márquez y, también allí, decidió viajar a Colombia. Ha trabajado con PBI en Medellín y ahora sale del país para continuar con sus estudios.

¿Qué ha supuesto para ti trabajar en Medellín para PBI?

Me incomoda que, por el simple hecho de tener un pasaporte de Estados Unidos, pueda brindar protección a colombianos en riesgo. Es algo absurdo pero jugamos con los recovecos de ese privilegio para ayudar. Pero he tenido que recordarme muchas veces que mis esfuerzos acá están enfocados en favorecer el espacio de trabajo de los defensores sin mediar en sus maneras de resistir y luchar. Ha sido difícil vivir un contexto tan difícil donde las victorias son pocas y las pérdidas diarias. Quería apoyar más, pero me ha bastado con lo hecho porque sé que es importante para los defensores.

¿Qué ha sido lo mejor y lo peor de la experiencia?

Lo mejor ha sido despertarme todos días en uno de los países culturalmente más bellos del mundo: la gente, la energía..., Colombia tiene algo. Cada oportunidad que he tenido de conocer gente colombiana ha sido un aprendizaje. Lo peor, paradójicamente, ha sido tener a veces que convivir con paradigmas “blancos” más basados en la lógica y la razón que en el corazón y la convicción.

Si tuvieras que resumir qué has aprendido, ¿qué destacarías?

He aprendido la “potencia y la impotencia” de la diplomacia: reuniones, trabajo político, informes..., cosas lentas que tienen su valor pero que te llevan a momentos de crisis “existencial”, porque el sentido de todo eso se pierde en un contexto tan grave donde a los defensores les toca enfrentar una realidad dura donde la verdad parece ni existir.

Tú naciste en la India, otro país con áreas de fuerte problemática social y de derechos humanos, ¿qué similitudes y qué diferencias encuentras entre los problemas que afrontan ambos países?

Un acompañado me preguntó de dónde era yo. (Es una pregunta de identidad difícil: ¿soy gringo?, ¿hindú? Ambas respuestas no son completas.) Le dije “India” y me miró y dijo “Qué miseria!”. Su respuesta me golpeó porque para mí, la India es más que miseria, en cambio, cuando la gente me pregunta por Estados Unidos, yo sí digo miseria porque la gente es más “pobre”. Hay que cambiar nuestra manera de ver las formas materiales y espirituales de entender la miseria. También dicen que en India las mujeres están infravaloradas pero en Colombia igualmente sufren discriminación. Y me han criticado aquí los movimientos sociales hindúes, diciendo que el pueblo colombiano lucha más. Pero lo que han logrado los intocables en los últimos 50 años no lo han conseguido aquí los afroamericanos con todos sus movimientos de derechos civiles. No estoy diciendo que la India no tenga sus problemas, al contrario, pero no podemos mirarla con filtro occidental. A muchos países no les interesa representar la India como potencia política, prefieren enfocarse en la pobreza.

¿Qué le lleva a un hindú, residente en Nueva York, a dejar todo para venir a realizar este trabajo? ¿Cómo llegaste hasta aquí?

El barrio hindú en Nueva York está compartido ahora con muchos colombianos, de ahí la cercanía y la idea. Ya había estado en Colombia pero quería volver para hacer algo más..., no sé, útil. Así llegué a PBI.



Gabo Arora

¿Qué se sabe de Colombia en dos países tan diferentes como EEUU y la India?

En India casi nada y es entendible dado que Colombia y su política no tienen mucho que ver con Asia. En EEUU suenan estereotipos: droga, Escobar, violencia... De alguna manera prefiero la ignorancia inocente de la gente en la India que la de EEUU donde es más resultado de una campaña de desinformación para servir intereses políticos y económicos.

¿Podrías destacar algún momento que se te haya grabado particularmente?

Cuando estuve en la comunidad de San José y me llevaron para probar la fruta de cacao. Cuando dije que no la había probado, dejaron todo para llevarme y fue espectacular su amor, sus historias. Me llenó de mucho sentido ese viaje, es algo que no olvido fácilmente.

¿Cuál es, en tu opinión, el estado de salud de Colombia y como prevés su futuro político y social?

No veo mucha esperanza y es lo que me ha afectado más en todo el trabajo, me ha desanimado mucho. Pero seguimos porque hay que seguir. Lo más importante es estar con la verdad y esa idea me ha ayudado en mis tiempos más difíciles en Colombia.



Christine Oram

El 30 de julio Bogotá celebraba su VII Media Maratón Internacional con la participación de Christine Oram, recaudadora de fondos en PBI Colombia, quien, con este motivo, recogió contribuciones entre familiares y amigos británicos para donar a PBI. Christine, aficionada al atletismo desde niña, recorrió junto a 40.000 personas los 10 kilómetros de la prueba en poco más de una hora. Es la

primera vez que un miembro de PBI consigue apoyo financiero a través de una carrera de este tipo y ella, además de llevarse una medalla a casa, se llevó una grata experiencia: “Ha sido emocionante poder compartir el esfuerzo con gente tan diversa y apoyar así el trabajo de Brigadas”.

David Troup, exvoluntario neozelandés de PBI en Barrancabermeja y Urabá, más conocido como “Flakito” entre sus compañeros, ha publicado un CD con 13 temas originales y canciones de América Latina, basado en sus experiencias como voluntario en Colombia y en su idea del “camino” (este mismo verano recorría el Camino de Santiago, en España, promocionando las iniciativas de las comunidades de Paz en Colombia). El disco, titulado “**En Camino**”, ha sido grabado en Londres con la participación de varios músicos de México, Francia, Inglaterra e Irlanda del Norte e incluye temas dedicados a los acompañados de PBI como “Anita” o la canción “Homenaje a Cacarica”. (www.flakito.net)



Portada del CD En Camino



www.peacebrigades.org/colombia

Para ello sólo tiene que visitar nuestra web o bien ponerse en contacto con nosotros:

Delegación PBI Internacional.-

Development House,
56-64 Leonard St., Londres
(Reino Unido), EC2A 4JX
Tel. (+44) 20 7065 0775
admin@peacebrigades.org

Proyecto PBI Colombia.-

11 Rue de la Linière
1060 Bruselas (Bélgica)
Tel. (+32) 32 2609 4400
info@pbicolombia.org

Delegación PBI en Colombia.-

Aptdo Aéreo 36157
Bogotá (Colombia)
Tel. (+57 1) 287 04 03 / 323 0706
info@pbicolombia.org

Peace Brigades Internacional (PBI) es una Organización No-Gubernamental registrada ante la ONU, que mantiene en Colombia un equipo de observadores / acompañantes internacionales permanentes desde 1994 con el fin de proteger el espacio de actuación de los defensores de derechos humanos, legalmente reconocidos, que sufren represión por su trabajo no violento en pro de los derechos humanos.

Para conseguir este objetivo, el Equipo de PBI Colombia, siempre a petición local, permanece sobre el terreno acompañando a las personas u organizaciones amenazadas, distribuyendo información sobre la evolución del conflicto, realizando labores de interlocución y cabildeo con las autoridades civiles y militares, así como con organismos estatales, ONGs, Iglesia, cuerpo diplomático y otras organizaciones para promover la acción internacional.

Si considera que la presencia de PBI es útil para proteger a las personas que trabajan por los derechos humanos, usted puede:

- Apoyarnos económicamente. A título personal o a través de una entidad.
- Unirse a su grupo PBI más cercano. Ayudar a la red internacional desde su ciudad.
- Hacerse voluntario PBI. No importa su procedencia, raza, condición sexual o religiosa.

